



Programas de intervención y gobernanza de pandillas a nivel local

El caso de Centroamérica

Hallazgos Principales

¿Cómo viven las personas que residen en los barrios afectados por las pandillas juveniles en el norte de Centroamérica? ¿Cómo pueden los jóvenes participar en programas de prevención pandilleril en zonas gobernadas por pandillas? Estas son preguntas cruciales para comprender el alcance y las limitaciones de los programas e iniciativas de prevención juvenil en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estos países han estado afectados por elevados niveles crónicos de violencia juvenil y pandillas callejeras.

El Centro de Estudios Kimberly Green para América Latina y el Caribe (LACC) de la Universidad Internacional de Florida (FIU) realizó un estudio para comprender los programas de intervención social contra la violencia y la gobernanza de las pandillas en el norte de Centroamérica. El estudio fue realizado con el apoyo del proyecto de Prevención de la Violencia Juvenil en América Latina y el Caribe (LAC-YVP), financiado por USAID y administrado por American Institutes for Research (AIR).

El estudio se basa en diecinueve grupos focales con personas que residen en zonas afectadas por la violencia juvenil, con expertos en la materia y con operadores de programas de prevención en Honduras, Guatemala y El Salvador. El estudio se llevó a cabo entre junio y agosto del 2021 y se basó en varias discusiones grupales con un total de 177 personas en la región.

Las pandillas juveniles tienen un impacto sustancial en la inseguridad de las comunidades donde operan. Por ejemplo, en algunos barrios del norte de Centroamérica, las pandillas regulan los espacios públicos e imponen ciertas reglas, inclusive sobre las fuerzas de seguridad del Estado. Como resultado, muchos residentes se ven obligados a ajustar su comportamiento para mantenerse seguros. En varios lugares, las disputas territoriales y las guerras de pandillas aumentan la incertidumbre y la inseguridad para la población, haciendo imposible cualquier tipo de acción colectiva en contra de estos grupos. Sin embargo, no todas las comunidades con pandillas están controladas por ellas. En algunos casos, las pandillas parecen cooperar con otros actores sociales de la comunidad para promover sus intereses, así como también los intereses de la comunidad.

En varios casos, las pandillas son vistas como miembros constitutivos de la comunidad. Las pandillas tienen lazos familiares, establecen relaciones personales y asociaciones comerciales que influyen directamente en cómo son vistos por las demás personas. Sin embargo, la creación de programas de prevención en áreas que carecen de espacios seguros donde los jóvenes puedan participar representa un desafío para las personas que viven en comunidades marginadas y controladas por pandillas.

Tres aspectos básicos para considerar en la implementación de programas de intervención basados en la comunidad en el norte de Centroamérica incluyen la ubicación, la participación de los pandilleros y los socios institucionales.

El presente estudio ha revelado que los lugares donde se desarrollan e implementan las actividades del programa son importantes. Las fronteras y los límites territoriales impuestos por las pandillas suelen ser invisibles y poco comprendidos por las instituciones gubernamentales y las organizaciones externas. El control territorial de las pandillas determina quiénes pueden acceder y trabajar en ciertas áreas y quiénes no. El problema se agrava en áreas limítrofes o en barrios bajo disputa territorial de pandillas. Los operadores de los programas deben comprender las dinámicas impuestas por el control territorial y reconocer los límites de su alcance. La implementación de programas en estas zonas requiere esfuerzos adicionales fundamentados en el diálogo con distintos actores dentro de la comunidad para desarrollar espacios seguros y mitigar la interrupción por parte de pandillas y otros grupos criminales.

Es necesario reconocer que es inevitable interactuar con estos grupos cuando se trata de llevar a cabo cualquier tipo de programa de intervención en comunidades controladas por pandillas. Sin embargo, este estudio muestra que algunos líderes y miembros de las pandillas pueden ver de manera positiva los programas de reducción de la violencia. También revela que, con mucha frecuencia, los pandilleros y sus familiares están deseosos por participar en las actividades de los programas si brindan oportunidades de desarrollo y seguridad. Investigaciones previas han demostrado que la mayoría de los jóvenes en pandillas en el norte de Centroamérica quieren abandonar el grupo violento y desistir de cometer crímenes. No obstante, esperan un espacio adecuado y seguro para hacerlo. Los programas que reconocen esta realidad y la influencia de las pandillas parecen tener más éxito. Sin embargo, algunos encargados de los programas de intervención no se sienten cómodos con la posibilidad de lidiar con miembros de pandillas y con sus asociados. Como resultado, evitan involucrarse con estos grupos y prescinden de un actor crítico que tiene el poder de boicotear cualquier tipo de esfuerzo en la comunidad. Lo anterior, sin duda, plantea cuestiones éticas y de justicia para las organizaciones que trabajan en las comunidades. Sin embargo, es esencial llevar tales discusiones a la mesa cuando se piensa en estrategias y programas para reducir la violencia en el norte de Centroamérica.

Finalmente, este estudio confirma los altos niveles de desconfianza local en las instituciones de gobierno y la percepción del público sobre la incapacidad gubernamental para resolver los problemas estructurales subyacentes a la violencia juvenil. Además, en la mayoría de las comunidades incluidas en este estudio, los organismos de seguridad estatales son vistos como ajenos y perjudiciales para el bienestar de la comunidad y sus miembros. Las iniciativas que tienen como objetivo tener a estas instituciones como parte de las actividades del programa deben considerar el tema de la confianza ciudadana para evitar problemas de participación por parte de la comunidad. Lo anterior no debe significar la exclusión de las instituciones gubernamentales en programas orientados a la comunidad. Más bien, requiere un esfuerzo concertado y sostenido para trabajar con la comunidad y seleccionar socios gubernamentales confiables con el propósito de desarrollar mecanismos de supervisión desde la comunidad.

KIMBERLY GREEN LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CENTER
Steven J. Green School of International and Public Affairs